



CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Comunidad de Madrid**ORDEN****NÚMERO: 1.000/2018**

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Expte: 124/2018

ÁREA DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

Examinados los documentos obrantes en el expediente procede resolver teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La llegada masiva de Menores Extranjeros No Acompañados (en adelante MENAS) a la península ibérica es una problemática supranacional que afecta a la Unión Europea, de la cual somos frontera, y a la que se está dando una respuesta local y voluntarista, como ha sucedido últimamente con la decisión adoptada por el Gobierno de España sobre el buque Aquarius y que representa una oportunidad para desarrollar una acogida con un verdadero enfoque basado en las necesidades de la infancia.

La población de MENAS que llega a la Comunidad de Madrid, ingresa, en un primer momento, en los Centros públicos de Primera Acogida y una vez que se ha determinado por parte de la Fiscalía de Menores su edad, son derivados a un recurso especializado en el que se elabora su proyecto socio-educativo individual. Estos centros, con una capacidad de 82 plazas, garantizan mediante la atención inmediata y la protección necesaria, la cobertura de sus necesidades básicas.

El recurso especializado para estos menores es el CACYS Manzanares, centro de titularidad pública, el cual se encuadra dentro de los recursos de adolescentes de la Red de Centros de Protección y que tiene como principal finalidad lograr la adaptación cultural y social de los MENAS

En los últimos meses se está constatando una afluencia masiva de MENAS, que está desbordando la capacidad de los Centros de Primera Acogida, lo que propicia que la atención no sea la más adecuada, hasta el punto de que se ha tenido que alterar el itinerario de entrada al Sistema, derivando a estos menores a otros recursos de adolescentes, sin pasar por el centro especializado en la atención e integración de los mismos, que cuenta únicamente con 32 plazas.

Hasta este momento, se había conseguido contener esta presión y resolver esta demanda con la Red existente de recursos residenciales, que ha venido absorbiendo estos ingresos inesperados en momentos puntuales, pero la situación actual se está volviendo insostenible, lo que hace necesario contar de manera inmediata con dispositivos de emergencia para poder prestar la necesaria atención a estos menores, mientras se posibilita su acceso a los recursos residenciales del Sistema de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid, de forma ordenada.

Esta sobreocupación imposibilita una atención adecuada a los menores, está dañando la convivencia entre los menores y dando problemas de seguridad, tanto para éstos como para los profesionales de estos centros, que se encuentran desbordados y con escasas posibilidades de prestarles la atención y cuidados que precisan en unos momentos tan delicados como son la llegada y la recepción de los menores, en especial, hacen inviable el desarrollo del Proyecto de Intervención Educativa.

SEGUNDO: Actualmente, la situación es extremadamente grave y así se ha puesto de manifiesto tanto



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csyv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0944619106032080593460**



por el Servicio de Inspección de la Consejería, como por los Directores de los Centros de Acogida. En estos informes se resaltan las continuas disputas entre menores, las agresiones y amenazas al personal educativo y al de seguridad. Muchas de estas disputas entre menores vienen dadas por la convivencia en espacios reducidos, debido a la sobreocupación, de menores distintas nacionalidades, con costumbres y realidades muy diferentes, debido a su cultura e historia personal.

Asimismo, en uno de sus últimos informes (mes de mayo), la empresa de seguridad contratada para la vigilancia de los centros y sus instalaciones referencia situaciones muy peligrosas tanto para los educadores como para los propios vigilantes de seguridad y las consecuencias (lesiones, bajas médicas y estados de ansiedad).

La Fiscalía General del Estado viene alertando ya desde el año 2016 de la preocupante situación generada por la llegada de MENAS a las costas españolas en pateras u otro tipo de embarcaciones patentemente precarias. En nuestro ámbito territorial, la Fiscalía Provincial de Madrid (Sección de Menores) giró visita de inspección al Centro de Primera Acogida Hortaleza en fecha 13 de febrero de 2018, poniendo de relieve que este centro presenta un preocupante nivel de sobreocupación. En el momento de la visita, había 54 menores ingresados cuando este centro sólo cuenta con 35 plazas. Como consecuencia de esta visita se ha remitido en fecha 7 de mayo de 2018 un escrito de la Fiscalía reclamando información sobre la situación actual y las medidas que se han adoptado o que se van a desplegar en relación con la sobreocupación.

CUARTO: Todo ello provoca, principalmente en los centros de primera acogida, un aumento del nivel de conflictividad que rompe absolutamente el clima de convivencia y hace inviable el desarrollo del Proyecto de Intervención Educativa, creando una situación insostenible tanto para éstos, como para para el resto de los menores, y en concreto para las menores adolescentes que conviven con ellos, que se ven expuestas de manera continua a situaciones de riesgo grave derivada de la relación que estos menores establecen con las mujeres.

Estos menores presentan un perfil complejo. Muchos de ellos llegan con graves problemas de consumos de inhalantes, lo que les hace tener reacciones desmesuradamente violentas ante cualquier situación de frustración o que no lleguen a entender; reacciones que provocan momentos en los que los profesionales y el personal de seguridad tienen una gran dificultad para garantizar el control y la seguridad del centro y de los menores, que se pone en grave riesgo.

También está presente el peligro de que estos menores puedan ser manipulados por mafias, para integrarse en redes de delincuencia organizada y de terrorismo yihadista, si no se acogen y atienden de manera adecuada; al fin y al cabo son niños a los que hay que proteger, y hay que entender que estos menores llegan en circunstancias muy precarias tras un peligroso viaje por tierras africanas. Los MENAS viven una fuerte ruptura de expectativas, debido a la tensión permanente entre la realización de su proyecto migratorio (que incluye responsabilidades de adulto, ser autosuficiente y hasta sustentador de la familia) y la condición de menor dependiente, en situación de desamparo y desarraigo que les impone la sociedad de acogida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El Acogimiento Residencial de Menores Extranjeros no Acompañados se constituye como una ineludible responsabilidad, que impide posponer o demorar su atención, no existiendo más alternativa que la de situar su atención como un deber de máxima prioridad, teniendo en cuenta las circunstancias de especial vulnerabilidad de este colectivo. Dicha responsabilidad viene prescrita por la siguiente normativa:





- Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados, destinado a coordinar la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas, desde la localización del menor o supuesto menor hasta su identificación, determinación de su edad, puesta a disposición del Servicio Público de protección de menores y documentación.
- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en la que se recoge que las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables, entre los que se encuentran los Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS). En concreto, el artículo 1º.3 establece que "...Las Administraciones públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados.

Por su parte, el artículo 14 se refiere a los supuestos de "Atención Inmediata" estableciendo que "Las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso, al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.

Atendiendo a la legislación internacional y nacional, no existe la posibilidad de establecer listas de espera para este perfil concreto de población, debiéndose garantizar su atención inmediata.

SEGUNDO: Ante el aumento progresivo de llegada de MENAS de distintas nacionalidades en los últimos meses, la Comunidad de Madrid, y en concreto, la Dirección General de la Familia y el Menor, como unidad competente en esta materia, tiene la responsabilidad y la obligación de actuar, habilitando las plazas necesarias para su atención inmediata en condiciones adecuadas, para responder a sus necesidades de acogida y de integración, y dar respuesta a una necesidad de atención específica a esta población en nuestra Comunidad Autónoma.

La ejecución de las actuaciones necesarias para ello, al no disponer la Dirección General de la Familia y el Menor de los medios materiales y personales adecuados, requiere la contratación inmediata de plazas adicionales de acogimiento residencial de MENAS en centros habilitados para ello.

TERCERO: El artículo 120 LCSP prevé un régimen de contratación excepcional cuando la Administración tiene que actuar de manera inmediata a causa de situaciones que supongan un grave peligro, como ocurre en este caso.

La utilización de cualquiera de los restantes procedimientos que permite la normativa de contratación pública, el procedimiento negociado sin publicidad por razón de imperiosa urgencia regulado en el artículo 168.b).1º LCSP, o el procedimiento de urgencia recogido en el artículo 119 LCSP, impediría la ejecución del servicio contratado de forma inmediata.

Tampoco se podría acudir a un contrato menor, pues el valor estimado para contratar plazas de acogimiento residencial de MENAS, superaría los límites establecidos en el artículo 118 LCSP para la tramitación de un contrato menor de servicios.

Entre las posibles opciones, se ha considerado más adecuado acudir a un procedimiento abierto, con tramitación urgente, al concurrir en este caso las circunstancias previstas en el artículo 119 LCSP, y se ha iniciado la tramitación urgente de un contrato de servicios de 30 nuevas plazas de acogimiento residencial de MENAS. No obstante, se considera necesario ampliar las plazas disponibles de forma





inmediata, para cubrir las actuales necesidades de acogimiento de MENAS hasta la formalización de este contrato.

Por todo ello, ante la situación de grave peligro que supone, al haberse superado ampliamente la capacidad física de los recursos residenciales existentes por la llegada imprevisible y masiva de menores extranjeros no acompañados, en virtud de lo que establece el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a propuesta de la Dirección General de la Familia y el Menor y, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

DISPONGO

- 1.- Declarar la TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA para la contratación de 30 plazas de acogimiento residencial temporal de menores extranjeros no acompañados, de 13 a 17 años (hasta el día inmediatamente anterior al cumplimiento de los 18 años), con medida de protección de guarda o tutela, atendidos con cargo a la Dirección General de la Familia y el Menor.
- 2.- La contratación del servicio se realizará desde el día 10 de julio de 2018 y durante el período de tiempo que se requiera hasta la formalización del nuevo contrato que se está tramitando con carácter de urgencia, garantizando la seguridad los menores.
- 3.- Ordenar que se ejecute lo necesario para satisfacer la necesidad sobrevenida.
- 4.- Comunicar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el presente Acuerdo en el plazo de 30 días.

Fecha	LA CONSEJERA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA (P.D. Orden 1355/2015, de 9 de julio) EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO
04/07/2018	

